

## **REPÚBLICA DE COLOMBIA**



### **RAMA JUDICIAL**

### **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)**

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, vencido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede a dictar la decisión correspondiente en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARIA RUBIELA MONTOYA RAMÍREZ contra la AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Rad. No. 05001-31-05-009-2019-00105-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada ANA MARÍA NUÑEZ OCHOA, con tarjeta profesional No. 133.395 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

### **ANTECEDENTES**

Pretende la demandante se declare la nulidad o la ineficacia del traslado que realizó al régimen de ahorro individual, administrado por Colfondos S.A.; consecuente a esto se ordene a esta administradora a trasladar inmediatamente a COLPENSIONES el saldo de su cuenta de ahorro individual

con sus rendimientos totales, bonos pensionales, sumas adicionales, etc.; además, que se ordene a COLPENSIONES a recibir tales dineros y a tenerla como su afiliada. Por último, solicita que se condene en costas a las demandadas.

Como sustento de sus pretensiones manifestó sucintamente lo siguiente: Nació el 1 de abril de 1962; se afilió al I.S.S., hoy COLPENSIONES, en el año de 1989; se trasladó al régimen de ahorro individual, administrado por Colfondos S.A., a partir del mes de marzo de 1999; para este traslado no recibió información clara, precisa, concreta y veraz de lo que era el régimen privado de pensiones, mucho menos de las ventajas y desventajas que este le podía representar; solicitó a Colpensiones la nulidad de tal traslado, así como su afiliación, pero le fue negada la petición, por faltarle menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez.

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, dio respuesta oportuna a la demanda oponiéndose a la prosperidad de todo lo pedido. Frente a los hechos, aceptó la reclamación que le hizo a la entidad y la respuesta que se le dio; de los demás, dijo que no le constaban o que no eran ciertos. Como excepciones de mérito propuso las que denominó inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

La AFP Colfondos S.A. también dio respuesta oportuna al escrito inicial manifestando frente a los hechos que era cierta la fecha de nacimiento de la demandante, así mismo que era actualmente afiliada a la entidad; de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de vicios en el consentimiento, buena fe y prescripción, entre otras.

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 9 de julio de 2020, decidió la controversia así:

*“PRIMERO: DECLARASE la ineficacia del acto de traslado que realizó la demandante MARIA RUBIELA MONTOYA RAMIREZ, del régimen de prima media al régimen de ahorro individual el 17 de diciembre del año de 1999 por intermedio de la AFP COLFONDOS S.A, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.*

*SEGUNDO: DECLARASE en consecuencia la no solución de continuidad de su vinculación al RPM hoy administrada por COLPENSIONES.*

*TERCERO: ORDENASE a la AFP COLFONDOS S.A, proceda a trasladar todos los aportes que realizó la demandante desde el 1° de enero del 2000 hasta la fecha, al régimen de prima media con prestación, definida hoy administrado por COLPENSIONES; aportes que deberá trasladar en un término máximo de tres (3) meses a partir de la ejecutoria de la sentencia.*

*CUARTO: ORDENASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, recepcionar los aportes realizados por el demandante a través de la AFP COLFONDOS S.A, dentro del historial laboral, para todos los efectos prestacionales que le puedan asistir a futuro.*

*QUINTO: DECLARASE que a la fecha de la presente sentencia, la señora MARIA RUBIELA MONTOYA RAMIREZ, acredita los presupuestos para acceder a la pensión de vejez, desde que cumplió los requisitos de las 1300 semanas y los 57 años de edad conforme a lo señalado en el art. 33 L. 100/93, modificado por el art. 9° L. 797/2003, con cargo a COLPENSIONES, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia.*

*SEXTO: SE ORDENA COLPENSIONES, que una vez, la demandante acredite ante dicha entidad su retiro del sistema, proceda a reconocer la prestación económica de pensión de vejez, atendiendo lo señalado por los arts. 33, 34 y 21 de la L. 100/93,*

*SEPTIMO: CONDENASE en costas a la AFP COLFONDOS S.A, en favor de la parte demandante, fijándose como agencias en derecho tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes; se exonera de pagar costas a COLPENSIONES, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.*

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación la apoderada de Colfondos S.A., pero solo con respecto al numeral 3 de la parte resolutive. Inicialmente dice que el traslado fue efectivo solo a partir del 1 de febrero de 2000, razón por la cual no puede ordenarse la devolución de aportes u otros conceptos a partir del mes de enero; agrega, que aunque en este segmento se habla de la devolución de aportes, en la parte motiva se dijo que se debían

incluir los descuentos por comisiones de administración, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y seguros previsionales, orden con la cual no está de acuerdo, dado que son dineros que están en manos de terceras personas y cumplieron su cometido o lo están cumpliendo aún todavía, o como los gastos de administración que están establecidos por mandato legal (tiempo 1:37:32 y ss.).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por la parte recurrente, de conformidad con el mandato establecido en los artículos 57 de la Ley 2 de 1984 y 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas decisiones u órdenes que puedan entenderse como desfavorables a los intereses de Colpensiones, se estudiarán por el grado de la consulta (art. 69 del CPTSS), al tenor de las directrices jurisprudenciales que sobre esta materia tiene establecidas la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Fuera de toda discusión, por existir plena prueba de ello, está que la demandante nació el 22 de enero de 1962 (fl. 15); que estuvo afiliada inicialmente al I.S.S., hoy Colpensiones, y más concretamente desde el año 1989 (fl. 66); que el 17 de diciembre de 1999, se trasladó al RAIS, concretamente a Colfondos S.A. (fl. 99), y que a esta AFP es a la que actualmente se encuentra afiliada (véase contestación dada por Colfondos a los hechos de la demanda).

Con estos presupuestos, en el contexto de los hechos y pretensiones de la demanda, y por supuesto de lo que debe estudiarse como consecuencia del grado de la consulta, lo primero que debe esclarecerse es si el traslado de la demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes,

rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad de la actora al momento de trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica.

Para estos fines, y partiendo del poder vinculante de la jurisprudencia de las altas Cortes, concretamente la de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, dado el fin de unidad e integridad que le otorgan los artículos 86 del CPTSS y 333 del CGP (véase en este mismo sentido la SL 440 de 2021), la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2019 (SL1688-2019, Rad. 68838), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una adecuada información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las reasesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros. Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

*El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:*

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones de información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales Y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición V la eventual pérdida de beneficios pensionales

Deber información, asesoría y de buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber información, asesoría, buen de consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

*1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible*

*Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.*

*Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.*

*Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo*

*desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.*

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

***“2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado***

*Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.*

*La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre impresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.*

*Sobre el particular, en la sentencia CSJ Sl. 19447-2017 la Sala explicó:*

*Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».*

*Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un*

*formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario[...].*

*De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.*

*Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SI. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.*

*Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.*

En materia de carga de la prueba del deber de información, se razonó en los términos siguientes:

*“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.*

*Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.*



Y por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

*“Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.*

*Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones:*

*En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.*

*En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.*

*Por otro lado, no es de recibo el planteo de Protección S.A., cuando sostiene que una vez realizó la reasesoría, Myriam Arroyave Henao no mostró interés en la ineficacia de la vinculación al RAIS, al conservar su status de afiliada durante un tiempo, Se dice lo anterior ya que la sugerencia de Protección S.A. de regresar al RPMPD, se produjo el 26 de noviembre de 2003, y el formulario para la nueva afiliación al ISS se diligenció el 14 de enero de 2004 (f.º 97), es decir, la interesada no dejó transcurrir dos meses desde que recibió asesoría. Por lo demás, este lapso es razonable, pues dada la relevancia de esta determinación, era natural que la accionante se tomara un tiempo de reflexión, buscara información y consejo profesional para, finalmente, adoptar su elección.*

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por el *a quo* en este aspecto, de ahí que habrá de confirmarse el fallo en este sentido, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente caso; a la Sala no le queda la menor duda que la demandada, en este caso Colfondos S.A., al no haber arrojado al proceso prueba idónea y completa de la información que le debió brindar a la señora Montoya Ramírez en el traslado que realizó en el mes de diciembre de 1999, la consecuencia no puede ser otra diferente a la de declarar ineficaz tal acto y, por tanto, tener como vinculación válida la que tenía en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida con el Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones- sin que para el efecto el registro de VOLUNTAD DE AFILIACIÓN que da cuenta el documento obrante a folios 99, tenga alcance alguno, por las razones que precedentemente quedaron expuestas, y mucho menos las precarias explicaciones que dio la demandante en el interrogatorio de parte que se le practicó.

Esto que se dice conlleva entonces a que las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), esto es, que la afiliación de la demandante con el ISS, hoy Colpensiones, no solo nunca sufrió alteración alguna, sino que la entidad demandada que actualmente maneja la cuenta de ahorro individual del demandante, esto es, Colfondos S.A., deberá devolver a la administradora del RPMPD no solo todos los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo sus rendimientos, sino también los dineros descontados por gastos de administración, seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás conceptos retenidos o deducidos. A este respecto, sea del caso tener presente lo que afirmó la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, rad. 56174:

*“Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrino:*

[...]

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*

*“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.*

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, esta misma Corporación en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.*

Obviamente tal orden solo surte efecto, a partir del momento en que comenzó a tener efectos el traslado, que como se puede leer a folios 20 y 99, fue a partir del 1 de febrero de 2000.

Atendiendo entonces lo antes dicho, este punto del fallo de primer grado se habrá de adicionar, no solo en cuanto a la fecha acabada de referir, sino en cuanto a que también se deberá devolver lo descontado por gastos de administración, seguros previsionales, fondo de garantía de pensión mínima y demás conceptos; y se modificará el plazo para su devolución, el cual será máximo de 30 días, atendiendo a que esta Sala ha considerado que es aplicable en estas decisiones lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 692 de 1994.

Lo dispuesto en materia de pensión de vejez, se habrá de confirmar, no solo porque de la prueba documental aparece que la demandante tiene más de 1300 semanas cotizadas (véase fls. 20/21, 24 y 67, entre otros), sino porque la edad establecida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, es decir, 57 años, la cumplió el 22 de enero de 2019. Agréguese, por lo demás, que conforme a los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 del CNSSO, aprobado por el decreto 0758 del mismo año, este tipo de prestaciones solo procede su pago cuando se acredite el retiro o desafiliación del sistema.

Las excepciones de mérito propuestas, estuvo bien que no se declararan probadas: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de validez de la afiliación, inexistencia de la obligación y buena fe; y otras, como la de prescripción, por estar comprometido un derecho pensional. En la sentencia inicialmente citada se anotó:

*Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esta vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD*

*o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adoctrinado que <<el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión>>.*

*Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo. (CSJ SL8544-2016).*

No existiendo otros puntos que resolver, y con las adiciones y modificaciones anotadas, habrá lugar a confirmar la sentencia de primer grado venida en apelación y consulta.

Atendiendo a la prosperidad parcial del recurso, en esta instancia no se hará condena en costas.


## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** el fallo de primera instancia, con la MODIFICACIÓN que las sumas a devolver tendrán como extremo inicial el 1 de febrero de 2000; con la ADICIÓN que COLFONDOS S.A. deberá también devolver lo descontado por cuotas o gastos de administración, seguros previsionales, fondo de garantía de pensión mínima y demás conceptos deducidos o retenidos, tal como quedó precisado en la parte motiva, todo esto dentro del término de 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 92 fijados el 28 de mayo de 2021  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

\_\_\_\_\_  
El secretario.